

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS: IMPROCEDENCIA DE CONTRATAR PERSONAS ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA, COMO SERVIDORES PÚBLICOS

ENTIDAD CONSULTANTE: MUNICIPIO DE LORETO

CONSULTAS:

1. Con respecto al inciso segundo del artículo 26 de la Codificación a la Ley de Contratación Pública, en base a qué criterio se debe considerar la oferta más conveniente, si respecto al menor precio, y cuál es el sustento legal.
2. Existe prohibición legal de contratar a un funcionario y/o un servidor público cualquiera, que en calidad de accionistas de una compañía de la que son socios, pudieren y/o pretendan contratar con una u otra institución pública distinta a la que prestan servicios públicos en el Estado.

BASES LEGALES:

LOSCCA, Art. 26 lit. o).

Codificación a la Ley de Contratación Pública, Arts. 16 lit. k) y 26.

Código Civil, Art. 18 Regla Primera.

Reglamento de Contrataciones del Municipio de Loreto, Ordenanza Municipal 1, R. O. N° 149, de 21-11-2005, Arts. 15 inc. tercero y 34.

PRONUNCIAMIENTOS:

1. El Art. 26 de la Codificación a la Ley de Contratación Pública, expresa: "ADJUDICACION.- El comité resolverá sobre la licitación o el concurso público de ofertas dentro del término de diez días contado desde la fecha del vencimiento del señalado en el inciso final del artículo anterior.

En todos los casos, el comité adjudicará el contrato al proponente que hubiere presentado la oferta más conveniente a los intereses nacionales e institucionales".

Esta disposición de adjudicar la oferta más conveniente a los intereses institucionales, ha sido también recogida por el Reglamento de Contrataciones del Municipio de Loreto, expedido mediante Ordenanza Municipal 1, publicada en el Registro Oficial 149 de 21 de Noviembre del 2005.

El inciso tercero del Art. 15, del referido Reglamento, establece que, con el informe técnico, el Comité de Contratación resolverá en el término de diez días la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la institución, la que deberá ser notificada en el término de tres días al beneficiario.

Por su parte, el Art. 34 del mismo Reglamento, dispone, que el Comité de Contrataciones resolverá sobre la licitación o concurso público de ofertas dentro del término de diez días, contados desde la fecha del vencimiento del término concedido a los oferentes para la formulación de aclaraciones en caso de haberlos, y añade, que la comisión adjudicará el contrato a la oferta más conveniente a los intereses institucionales.

El artículo 16, letra k), de la Codificación a la Ley de Contratación Pública, determina como uno de los documentos precontractuales, el establecer los principios y criterios para la valorización de ofertas.

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido enunciada en el informe del Asesor Jurídico del Cantón Loreto, en su considerando QUINTO, se expresa: "En nuestro medio se tiene una concepción errada de lo que constituye "la oferta más conveniente a los intereses nacionales o institucionales", ya que no necesariamente es la más baja oferta presentada. Este ha constituido un gravísimo artificio con el que se han presentado muchos oferentes en los procesos de contratación pública, propuestas con las cuales muchas veces han triunfado, y a través del reajuste de precios, el Estado ha terminado cancelando más de lo presupuestado".

Del mismo modo, en el considerando SEXTO del mencionado fallo, se hace referencia al Art. 5 del Reglamento para el control de la discrecionalidad en los actos de la administración pública, el cual establece, en cuanto al tema de la adjudicación de contratos, que "en los actos de adjudicación de contratos no basta con la adjudicación sin más, es necesario que la administración valore íntegramente el contenido de las ofertas y del expediente administrativo y que exteriorice justificadamente su decisión".

De lo expuesto se infiere que para calificar a una oferta como la más conveniente a los intereses nacionales o institucionales, debe entenderse el término "más conveniente", en todo su contexto, y no únicamente en el aspecto económico, teniendo como referencia que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos a los oferentes en las bases.

2. La letra o) del Art. 26 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, establece como una prohibición de los servidores públicos, el suscribir o mantener contratos con el Estado o sus instituciones, por sí mismos o como socios o accionistas, o miembros de una persona de derecho privado o, por interpuesta persona.

La disposición legal invocada es categórica y no admite interpretación alguna, por lo tanto debe estarse a su tenor literal, conforme a la regla primera del Art. 18 del Título Preliminar del Código Civil.

En consecuencia, resulta improcedente contratar personas para desempeñarse como servidores públicos, que sean accionistas de una compañía que pretenda celebrar un contrato con cualquier institución del Estado.

OF. PGE. N°: 01426, de 23-06-2008

ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO: CUANTÍA EN CONCURSO PÚBLICO Y LICITACIÓN DESIERTA

ENTIDAD CONSULTANTE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
CONSULTA:

Si dentro del proceso licitatorio para la adquisición de equipo caminero, en el que se ha declarado desierto el ítem correspondiente al tractor de oruga en vista de que las ofertas presentadas no cumplían todos los requerimientos técnicos establecidos en las bases, existe la probabilidad de adjudicar el tractor de oruga ofertado por la empresa DITECA, por el valor de USD. 225.000, por reunir o ajustarse a las necesidades topográficas del Cantón.

BASES LEGALES:

Codificación a la Ley de Contratación Pública, Arts. 1 y 4.

PRONUNCIAMIENTO:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de la Codificación a la Ley de Contratación Pública, las entidades públicas que requieran adquirir bienes deben sujetarse a las normas en ella establecidas en este cuerpo legal y su Reglamento General Sustitutivo de aplicación.

En tal virtud, la adquisición de los bienes materia de su consulta deberá cumplir los procedimientos precontractuales prescritos en dicha normativa o los que señalen las disposiciones contenidas en la reglamentación interna, de la propia Municipalidad a la que usted representa, en aplicación del penúltimo inciso del artículo 4 de la Ley citada.

En el presente año, la cuantía para el concurso público de ofertas es de USD. 316.359,08, considerando el Presupuesto General del Estado, que

Creado con

nitroPDF professional

descargue la prueba gratuita online en nitropdf.com/professional

nitroPDF professional

descargue la prueba gratuita online en nitropdf.com/professional

Creado con

 **nitro**^{PDF} professional

descargue la prueba gratuita online en nitropdf.com/professional